

ESTADO ESPAÑOL: PROBLEMAS DEL PASADO QUE VUELVEN EN PLENA PANDEMIA.

El Gobierno se juega aprobar los Presupuestos Generales del Estado, algo que daría estabilidad a la legislatura. Unidas Podemos ansía aprobar las cuentas con ERC, PNV y EH Bildu, formaciones independentistas y nacionalistas periféricas con las que aspiran a construir una “dirección de estado” duradera • La guerra entre las derechas españolas cobró un nuevo sentido con la moción de censura de Vox, en la que se evidenció la distancia con el PP. El partido ultraderechista la aprovechó para introducir su discurso trumpista en los medios • La vuelta de la guerra en el Sáhara Occidental implica al Estado español, todavía potencia administradora de este proceso de descolonización, y, muy especialmente, a las izquierdas españolas, unidas por vínculos políticos y sentimentales al pueblo saharauí.



Sato Díaz | @JDSato
Artículo finalizado el 18/11/2020

El pasado, a veces, vuelve. Con otro rostro y con formas nuevas, el contexto es distinto, pero el fondo se mantiene. En el Estado español, en su deriva política, estas cosas suelen pasar a menudo. Quizás porque la moderna democracia constitucional, del 1978, no ha sido capaz de mirar al pasado con valentía y responsabilidad y cerrar heridas, quizás porque la Transición política de la dictadura a la democracia no implicó una ruptura democrática con lo anterior. También, porque desde que en el año 1992 se impusiera el Tratado de Maastricht, el Estado español quedó en una posición subalterna a un ritmo europeo en el que la división del trabajo continental no dejaba por estas latitudes muchas opciones, ni capacidad de decisión en el modelo productivo, ni soberanía económica, una pérdida que se incrementó con la llegada de la moneda única, el euro, en enero del 2002. Quizás, también, por otros muchos motivos más que no llegamos ni a otear.

Estos días de mediados de noviembre, el pasado ha vuelto a irrumpir en la política española en un vértice que parecía olvidado. Aunque a veces reaparece y copa titulares, el conflicto del Sáhara Occidental es un conflicto olvidado en la comunidad internacional. Sin embargo, es un asunto que incumbe directamente al Estado español, el cual sigue siendo potencia administradora de este territorio no autónomo, pendiente de descolonización, la última colonia de África le llaman.



Ataques y bombardeos del Ejército Saharaui contra posiciones marroquíes | 16.11.20
(Foto: <http://larealidadsaharai.blogspot.com>)

El pasado 14 de noviembre, el Frente Polisario, movimiento de liberación que ostenta el Gobierno en la RASD (República Árabe Saharaui Democrática), decretaba el estado de guerra y retornaba a las armas contra Marruecos, país que ocupa militarmente parte del territorio del Sáhara Occidental y que había vulnerado el alto el fuego en una escaramuza unos días antes. Vuelve la guerra al desierto, tras el fracaso del alto el fuego auspiciado por la ONU desde el año 1991. Más adelante profundizaremos en este asunto, y en cómo afecta a la política española y, sobre todo, a sus izquierdas.

De momento, quedémonos con la idea de que el pasado puede volver, y en un Estado cuya construcción democrática se ha hecho corriendo para llegar a la altura de los países del entorno, tras un retraso de una dictadura de décadas, puede regresar con fuerza. La metáfora podría ser que la historia reciente de la política española tiene espejos ocultos en algunos habitáculos y, cuando esta se mira en uno de estos espejos, reconoce un pasado al que no quiere mirar y resurgen viejos problemas: de carácter identitario, territoriales, económicos, sociales, políticos, institucionales...

En esta recta final del año, la segunda ola de la pandemia vuelve a tensionar el sistema hospitalario de algunas comunidades autónomas, mientras los diferentes confinamientos golpean especialmente a sectores económicos como el turismo y la hostelería, que forman parte de la piedra angular de la economía española.

Por eso, tal y como contábamos en el anterior análisis de [En Perspectiva, para la Rosa Luxemburg Stiftung](#), decimos que el Estado español se encuentra inmerso en una crisis total que se percibe desde distintas perspectivas, y que la pandemia de covid-19, al suponer una catarsis en diversas facetas de la humanidad, las agrava a todas ellas e incorpora nuevas crisis. El fatídico 2020 se encamina a su recta final. Un año que no se puede explicar sin la covid-19, la cual ha afectado a todos los aspectos de la vida, desde los más íntimos, hábitos y costumbres personales y sociales, hasta la política, la economía, sus consecuencias sociales, la gobernanza global... También el año en el que, por primera vez desde la II República, un Gobierno de coalición está al frente del Estado español y las izquierdas al PSOE entran en el Consejo de Ministros.

En esta recta final del año, la segunda ola de la pandemia vuelve a tensionar el sistema hospitalario de algunas comunidades autónomas, mientras los diferentes confinamientos golpean especialmente a sectores económicos como el turismo y la hostelería, que forman parte de la piedra angular de la

economía española. El personal sanitario se encuentra cansado tras la vorágine de este año y sus condiciones laborales no han mejorado en la mayoría de los casos; el descontento es generalizado con las distintas administraciones públicas. Los hosteleros están cuajando protestas contra las medidas públicas anticovid que, en algunas comunidades autónomas, han llegado a cerrar los establecimientos de restauración. Y es que, precisamente, aquí encontramos otro de esos espejos que reflejan el pasado y lo traen al presente: la economía española no se ha prodigado mucho en actualizar lo público en los últimas décadas, mientras que ha confiado en que el turismo y sus actividades derivadas siempre serían un motor económico principal. Ahora, la tragedia.



Protestas de hosteleros españoles por la crisis del coronavirus
(Foto: galiciapress.es)

aunque paliada por las medidas de protección a sectores sociales que el Gobierno ha ido poniendo en marcha. La ultraderecha de Vox ve aquí un caldo de cultivo para crecer, suponiendo esto un peligro para el medio plazo de la política española.

*...en los barrios más empobrecidos la pandemia ha apretado con más fuerza.
Familias numerosas viviendo en casas de pocos metros cuadrados,
empleos manuales que no permiten el teletrabajo, desplazamientos a estos puestos
de trabajo en unos transportes públicos saturados en muchos casos...*

En este contexto, como decíamos, hay otras expresiones de esta situación de crisis total por la que pasa el Estado español este año de pandemia. Desde el punto de vista social, la desigualdad crece (otro espejo que trae al presente un problema crónico) y, tal y como se ha podido comprobar globalmente, la covid-19 sí que entiende de clases sociales. El Gobierno impulsaba en primavera el llamado “escudo social”, una serie de medidas: ayudas económicas, en materia de vivienda y alquileres, suministros esenciales o políticas relacionadas con las condiciones laborales, como los ERTE o ayudas a autónomos... También implantaba el Ingreso Mínimo Vital, una prestación dirigida a prevenir la pobreza y exclusión social, una suerte de renta mínima, un logro que desde Unidas Podemos no tardaron de definir como la consecución de un nuevo derecho subjetivo. Meses después, el balance de esta medida es negativo: de las 837.333 solicitudes presentadas entre junio y octubre, 69.530 han sido denegadas y 34.534 revisadas y solo 12.789 han sido aprobadas y abonadas. Del resto, ni se sabe.

Ha quedado claro, durante estos meses, cómo en los barrios más empobrecidos la pandemia ha apretado con más fuerza. Familias numerosas viviendo en casas de pocos metros cuadrados,

empleos manuales que no permiten el teletrabajo, desplazamientos a estos puestos de trabajo en unos transportes públicos saturados en muchos casos...

El pasado mes de septiembre, en la Comunidad de Madrid, la tensión social aumentó, precisamente, por la evidencia de la diferencia entre barrios ricos y pobres y por el maltrato que la presidenta madrileña, adalid de la rama más ultra y neoliberal Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, dirigió contra algunos distritos, especialmente del sur de la capital. Las protestas de asociaciones vecinales y colectivos sociales fueron protagonistas durante unas jornadas. La Policía Nacional, dependiente del Gobierno estatal de coalición, cargó contra manifestantes en Vallecas, uno de estos barrios de clases populares, en contraste con el buen trato que recibieron los manifestantes de ultraderecha del rico barrio de Salamanca de Madrid en sus protestas contra el Gobierno durante la primavera.



Cargas policiales durante la concentración contra el confinamiento selectivo en Madrid (Foto: EFE | laSexta.com)

Las medidas de confinamiento incluyeron cercar las zonas de Madrid más castigadas por la enfermedad, cerrando locales y espacios públicos de ocio, como parques y jardines, pero permitiendo que las personas que vivían en ellos salieran a trabajar al centro de la ciudad u otros distritos más ricos. Se daban, así, paradojas como, por ejemplo, que una cuidadora de niños pudiera pasear con ellos durante sus jornadas de trabajo en un parque de Madrid, pero, al llegar a su casa, no pudiera hacerlo con sus propios hijos en el barrio confinado. La lucha de clases se evidenciaba en una ciudad en la que quedaba dibujada perfectamente en el mapa una línea que expresaba una gran coincidencia: las personas que viven en las zonas ricas, de mayoría de derechas, tenían unas libertades mayores que las que habitan zonas pobres, con más votantes de izquierdas, que quedaban confinadas.

En cuanto a la crisis territorial, otro espejo que siempre vuelve a reflejar los errores del pasado, la pandemia la ha dejado latente, pero se mantiene. Tal y como vimos en las elecciones vascas y gallegas del mes de julio, las fuerzas soberanistas e independentistas siguen sumando adeptos en distintos territorios. El modelo autonómico vive momentos de relevante descrédito en algunas de las periferias nacionales. El problema catalán sigue vivo, aunque en un proceso de enfriamiento tras la grave crisis de hace tres años, cuando la Generalitat catalana (Gobierno autonómico) llegó a declarar simbólicamente la independencia del Estado español. La continuidad en la cárcel de los dirigentes independentistas presos por los sucesos del 2017 sigue siendo una anomalía que empaña el transcurso de la vida política catalana y española.

La lucha de clases se evidenciaba en una ciudad en la que quedaba dibujada perfectamente en el mapa una línea que expresaba una gran coincidencia: las personas que viven en las zonas ricas, de mayoría de derechas, tenían unas libertades mayores que las que habitan zonas pobres, con más votantes de izquierdas, que quedaban confinadas.

El próximo 14 de febrero del 2021, si la pandemia no lo impide, se celebrarán elecciones catalanas para elegir un nuevo Parlament que elegirá un nuevo president de la Generalitat. El independentismo puede fortalecerse, según encuestas, a pesar de las múltiples disputas internas. A finales del mes de septiembre, el president de la Generalitat, Quim Torra, quedaba inhabilitado para el cargo por el Tribunal Supremo por un motivo que parece un chiste: se había negado a retirar una pancarta del balcón del Palau de la Generalitat que pedía libertad para los presos políticos y fue denunciado por desobediencia por parte de la Junta Electoral. El Supremo, fiel a su estilo, no defraudó, la Justicia española no tiene problemas en condicionar la política.

La democracia española sufre también una grave crisis institucional. (...) la Transición de la dictadura a la democracia no sirvió para democratizar los recovecos de lo que se llama “estado profundo”.

De cara a las elecciones de febrero, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la izquierda socialdemócrata independentista, aparece como la opción favorita. Un gobierno de izquierdas en el Estado y otro en Catalunya podrían acercar a una solución política al conflicto catalán, de momento lejos en el horizonte. La derecha española hará todo lo posible por mantener vivo un conflicto del que sacan tajada electoral en el resto del Estado. Una parte de la derecha nacionalista catalana, hará lo propio.

La democracia española sufre también una grave crisis institucional. Hay dos casos principales en este sentido. Monarquía y uso partidista y patrimonialización de instituciones del Estado: dos espejos más de problemas que recuerdan cómo la Transición de la dictadura a la democracia no sirvió para democratizar los recovecos de lo que se llama “estado profundo”.

Tal y como contamos en verano, el pasado mes de agosto, el rey emérito, Juan Carlos I, huía a los Emiratos Árabes Unidos asediado por casos de supuesta corrupción. La monarquía, que, para algunos sectores sociales, lleva en el entredicho mucho tiempo, quedaba muy tocada; la cúspide de la pirámide que es el sistema constitucional español, en grave crisis. Cada vez más, el debate monarquía-república ocupa espacio público. El pasado 12 de octubre, la Plataforma de Medios Independientes, que agrupa a varios periódicos digitales, publicaba una encuesta para conocer cómo se posiciona la opinión pública ante este debate. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se niega a preguntar sobre el tema desde hace años, los medios más influyentes corren un tupido velo en cuanto a la crítica a la monarquía se refiere. Los resultados de aquella encuesta, muy sugerentes: si se celebrara un referéndum para elegir el modelo de estado, la ciudadanía elegiría en un 40,9% la opción republicana, en un 34,9% la monárquica, un 12,9%, no lo sabe todavía, un 6,4% no iría a votar y un 4,9% lo haría en blanco.



Infografía sobre los resultados de la encuesta realizada la Plataforma de Medios Independientes acerca de la monarquía (Foto: ElSaltoDiario)

Por otro lado, diversas piezas judiciales e investigaciones periodísticas han ido sacando a la luz cómo el Ministerio del Interior, en manos del exministro Jorge Fernández Díaz, del Gobierno de Mariano Rajoy, del PP, creó una “policía política”, le llamaban “policía patriótica”, que se dedicaba a investigar a la oposición y disidencia política. En especial, investigaban a Podemos, que entonces, en el año 2015, aparecía en algunas encuestas como la fuerza política con más intención de voto. Asimismo investigaban independentismo catalán, que entonces empezaba a mirar hacia la celebración de la consulta del 1-O.

Que, en una democracia europea, en pleno siglo XXI, el poder político utilice a la policía con fines partidistas ejemplifica los vicios de la política española.

Las investigaciones señalan a altos cargos del Ministerio del Interior y sitúan en el centro de la trama al ex-comisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, que tuvo contactos con altos responsables políticos de distintas formaciones y conserva grabaciones de los mismos. Actualmente en prisión, Villarejo tiene material de sobra para filtrar a medios de comunicación sobre personas que han tenido influencia en distintos puestos de la administración del Estado. Un espía que ha llegado a poner en el entredicho al propio Juan Carlos I, al haber estado en contacto con su ex amante, Corinna Larsen, quien ha declarado sobre casos que afectan al monarca y va relevando informaciones varias, entre ellas algunas relativas a supuestas cuentas en paraísos fiscales o sociedades pantalla. Que, en una democracia europea, en pleno siglo XXI, el poder político utilice a la policía con fines partidistas ejemplifica los vicios de la política española.

Además de estos dos casos, el poder judicial tampoco pasa por un momento ejemplar. El Consejo General del Poder Judicial, desde el que se proponen los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo y otras altas instancias, lleva caducado dos años, con jueces en los órganos directivos que ya tendrían que haber dejado el puesto. La derecha política, en connivencia con la judicial, han conseguido blindar una mayoría conservadora y el Gobierno de coalición y su exigua mayoría en el Congreso no es capaz de sustituirla.



Dirigentes independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo en la sentencia del 'procés' (Foto: captura RTVE.es)

La participación de los altos estamentos judiciales en la vida política es, por tanto, un elemento a tener en cuenta, y tiene un filtro conservador que lo empaña todo. La participación en el día a día de la política, también. Y no solo dejando su impronta en sentencias, cabe recordar que hace unos días se conmemoraba un año desde que el Supremo condenara a 100 años de prisión a los dirigentes independentistas catalanes, sino

también marcando el ritmo político e influyendo en la agenda mediática. Y es que, durante los meses que han transcurrido desde que se conformó el Gobierno de coalición, allá por el mes de enero, las derechas y ultraderechas han hecho lo posible para derrocarlo. Declaraciones públicas y actuaciones judiciales se acompañaban con el relato de los medios más conservadores y con las fuerzas políticas de derechas, frente al Gobierno.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE): punto de partida

La coyuntura política española versa, sobre todo, sobre las negociaciones parlamentarias del Gobierno de coalición con los diferentes grupos para obtener una mayoría que le permita sacar adelante los PGE. Este momento es crucial por varios motivos. En primer lugar, cabe recordar que los presupuestos vigentes fueron elaborados por el Gobierno conservador liderado por Rajoy, con Cristóbal Montoro como ministro de Economía. Son unas cuentas que datan del año 2018, pocos meses antes de que Pedro Sánchez entrara por primera vez a La Moncloa como presidente del Gobierno tras proclamarse vencedor de una moción de censura a Rajoy. En el 2019, ya el Ejecutivo socialista intentó sacar adelante unas cuentas propias, las cuales no salieron ante la negativa de los partidos independentistas catalanes. Esto llevó a una convocatoria de elecciones generales en abril de ese mismo año y, tras no llegar a un acuerdo el PSOE con Unidas Podemos, a una repetición de comicios en noviembre. Tras estas, se constituyó el Gobierno de coalición en el mes de enero.

Las cuentas de Montoro, por lo tanto, están desfasadas. Más allá del cambio de signo político en el Gobierno, de conservador a progresista, los presupuestos vigentes no contemplan la difícil situación económica y social actual, derivada de la pandemia. Por otro lado, unos nuevos PGE deben ser la pista de aterrizaje para los fondos europeos, Next Generation EU, aprobados por la Comisión

Europea el pasado mes de julio. Un total de 140.000 millones de euros (de los cuales la mitad son préstamos) desembarcarán en el Estado español, uno de los países miembro de la Unión Europea más castigados por la crisis del coronavirus. Así, los presupuestos propuestos por el Gobierno de coalición se centran en dos de los objetivos primordiales para Europa: la digitalización de la economía y la transición hacia una economía verde.



Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentando los Presupuestos Generales del Estado para 2021. (Foto: MONCLOA)

El pasado 27 de octubre, Sánchez e Iglesias presentaban conjuntamente la

propuesta del Gobierno de coalición de Presupuestos Generales del Estado en el Palacio de La Moncloa. Algunos datos significativos son, por ejemplo, que la inversión pública ascenderá a 240.000 millones de euros e incorporan 27.000 euros de adelanto del plan europeo. Se destinará un 150% más en Sanidad de lo que se ha hecho en los últimos años, una competencia que está transferida a las comunidades autónomas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contará con 11.935 millones de euros para ejecutar políticas verdes. El Plan España Digital 2025 movilizarán entre este año y el 2022 una inversión pública y privada del entorno de los 70.000 millones de euros. La inversión en el sistema educativo público y formación profesional aumenta un 70,2%, con un importante aumento en becas. También se incrementa la partida para políticas de cuidados.

Los presupuestos propuestos por el Gobierno de coalición se centran en dos de los objetivos primordiales para Europa: la digitalización de la economía y la transición hacia una economía verde.

Además, hay alguna renovación para asemejar la presión fiscal española con la media europea, ya que, en 2019, España recaudó un 7,4% del PIB menos que la media de la zona euro. Estas nuevas medidas, muy sutiles, son: subida del Impuesto de Sociedades para grandes grupos empresariales, limitando las exenciones por dividendos y plusvalías generadas por su participación en sociedades filiales. Subida de 1 punto porcentual del Impuesto de Patrimonio para patrimonios de más de 10 millones. Subida de 3 puntos el IRPF para rentas del capital de más de 200.000 euros. Subida de 2 puntos del IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 mil euros. Tributación mínima del 15% para las SOCIMIS.

Unidas Podemos pudo sacar pecho, tras una negociación con sus socios de gobierno que se alargó hasta el último momento, de dos temas cruciales de los que los de Iglesias siempre han hecho bandera. Por un lado, medidas de facilitación a la ciudadanía para solicitar el Ingreso Mínimo Vital



Proyección del lema 'Zona turísticamente saturada. Vivienda para el vecindario' sobre la iglesia de Russafa (Valencia) y sobre el mercado del mismo barrio. (Foto: Entre Barris)

ya que, como hemos dicho, su implantación ha sido un desastre. Por otro lado, el compromiso de presentar en el Congreso en los próximos cuatro meses una ley que regule el mercado del alquiler. El acceso a una vivienda o al mercado del alquiler es un gran problema para buena parte de la población por los altos precios actuales, sobre todo en zonas tensionadas como las grandes urbes, y especialmente para la juventud.

Posibles mayorías, hacia una “dirección de estado”

El debate presupuestario está siendo de alto nivel político en el Parlamento por las implicaciones que conlleva. El Gobierno de coalición tan solo suma, entre socialistas y diputados de Unidas Podemos, 155 de 350 diputados. La mayoría absoluta se sitúa en los 176 escaños. Por ello, necesita convencer a otros grupos parlamentarios para sacar adelante las cuentas.

Como hemos dicho, los presupuestos son de vital importancia por varios motivos. Uno de estos tiene que ver con que, si salen aprobados, esta legislatura, que en menos de un año ha pasado por momentos muy difíciles con las derechas y ultraderechas aprovechando la pandemia para intentar derrocar al Gobierno por tierra, mar y aire, gozaría de una estabilidad que permitiría fijarse en el horizonte de mantenerla hasta el 2023. Esto es así porque con los presupuestos del 2021 aprobados, si no hubiera acuerdo en el 2022 para renovarlos, se podrían prorrogar un año-, por lo que se asegura el horizonte del 2023 para la legislatura del primer Gobierno de coalición.

Además, según ha teorizado el vicepresidente Iglesias, estos presupuestos supondrían un punto de partida no solo para asegurar una legislatura progresista, sino también para crear una nueva “dirección de estado”. Con esto, el líder de Podemos quiere decir que actualmente la gobernabilidad en el Estado español, dada la fragmentación política, tiene dos posibilidades: por un lado, un acuerdo entre el trío de las derechas y ultraderechas que conforman los partidos PP, Vox y Ciudadanos; por otro, la llamada “mayoría de la investidura” que hizo posible el Gobierno de coalición en enero.

Esta mayoría está compuesta, además de por PSOE y Unidas Podemos, evidentemente, por independentistas y soberanistas de izquierdas catalanes (ERC), vascos (EH Bildu) y gallegos (BNG), nacionalistas vascos de derechas (PNV) y otros regionalistas de izquierdas, tales como Compromís, del País Valencià, o Más País (partido liderado por el ex número dos de Podemos, Íñigo Errejón, con amplia presencia en la Comunidad de Madrid). Además, hay otros regionalistas de izquierda moderada como Nueva Canarias o el Partido Regionalista de Cantabria con presencia en el Congreso, y Teruel Existe, un partido de implantación provincial que ha venido a representar desde un talante progresista el descontento de la España Vacía, -las zonas rurales discriminadas en servicios públicos y ofertas de futuro, lo que conlleva al fenómeno de la despoblación y envejecimiento de la población-.



Congreso de los Diputados 2019 (Foto: EFE)

Iglesias considera que la opción de gobierno frente a las derechas pasa por la conjunción, en clave plurinacional, de las izquierdas estatales (PSOE y Unidas Podemos) con ERC, PNV y EH Bildu. Un ofrecimiento a estas fuerzas para que de las decisiones sobre la gobernabilidad del Estado. Un contexto que tendría que llevar, irremediamente, a un reconocimiento del Estado como plurinacional en el que distintas naciones conviven y se expresan de forma diferente. De lo contrario, es tan solo una ilusión el plantear una “dirección de estado” con estas fuerzas políticas que plantean mayor soberanía para algunos territorios cuando no, directamente, la independencia del Estado español.

Los presupuestos son de vital importancia (...) si salen aprobados, esta legislatura, que en menos de un año ha pasado por momentos muy difíciles con las derechas y ultraderechas aprovechando la pandemia para intentar derrocar al Gobierno por tierra, mar y aire, gozaría de una estabilidad que permitiría fijarse en el horizonte de mantenerla hasta el 2023.

Cabe destacar la postura de Ciudadanos en esta negociación presupuestaria. Recordemos que Ciudadanos es un partido que, antes de dar el salto a nivel estatal, se hizo fuerte en Catalunya contra el independentismo. A la hora de establecerse como partido en todo el territorio del Estado español, se hizo pasar como un partido moderno, de tendencia liberal (familia en la que está incluida en el Parlamento Europeo), que criticaba la corrupción del antiguo bipartidismo (PSOE y PP) y que venía a renovar el panorama político. “Un Podemos de derechas”, se le llegó a definir. Sin embargo, su líder y fundador, Albert Rivera, fue escorándose hacia la derecha nacionalista española y acabó compitiendo con el PP y con Vox por ese espacio. Cuando Vox consiguió establecerse como alternativa a nivel estatal, en las elecciones generales de noviembre de 2019 el partido ultraderechista pasó a tener de 24 escaños a 52 y Ciudadanos se estampó: de 57 a 10.

Este batacazo electoral llevó a que su líder, Rivera, dimitiera y cogiera el timón Inés Arrimadas, la hasta entonces responsable del partido en Catalunya, quien había utilizado durante los últimos años la misma estrategia populista, nacionalista y de ultraderecha que Rivera. Sin embargo, con Arrimadas al frente del partido a nivel estatal, Ciudadanos ha optado por un giro estratégico mirando de nuevo al centro liberal, y optando por llegar a acuerdos parlamentarios con el Gobierno de coalición. Así ha sido durante la pandemia, dando apoyo a las prórrogas del estado de alarma solicitadas por el Gobierno para poder materializar las restricciones de movimientos de la ciudadanía para frenar a la covid-19. Es algo impensable, el que Ciudadanos apoyara alguna medida de Sánchez, meses atrás.



El presidente del Gobierno recibe a la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas. Septiembre 2020 (Foto: Moncloa)

... el Gobierno de coalición tiene distintas posibilidades para conseguir una mayoría parlamentaria que apruebe los presupuestos: la aritmética variable. Puede o bien mirar a las izquierdas y a las distintas fuerzas soberanistas, como quiere Unidas Podemos, o puede mirar a la derecha e intentar sumar con Ciudadanos y otras fuerzas, como gustaría a sectores del PSOE.

Con esta nueva estrategia de Ciudadanos, el Gobierno de coalición tiene distintas posibilidades para conseguir una mayoría parlamentaria que apruebe los presupuestos: la aritmética variable. Puede o bien mirar a las izquierdas y a las distintas fuerzas soberanistas, como quiere Unidas Podemos, o puede mirar a la derecha e intentar sumar con Ciudadanos y otras fuerzas, como gustaría a sectores del PSOE. Sin embargo, la poca influencia de Ciudadanos en el Congreso, tan solo 10 diputados, hace que en estos momentos parezca que la opción más plausible sea la de la mayoría de la investidura. Pero Ciudadanos no quiere descolgarse, quiere aparecer en la foto de unos presupuestos que incorporan los fondos europeos, necesarios para los intentos futuros de salir de la crisis.

Aprobar presupuestos con la mayoría de la investidura conlleva a acuerdos tácitos entre el Gobierno y estos grupos. Por ejemplo, el hecho de que ERC, con unas elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, se atreva a facilitar unos presupuestos del Gobierno estatal quiere decir que hay algunos compromisos por parte del Gobierno con respecto al conflicto catalán. ERC acordó su abstención

que permitió la investidura de Sánchez a cambio de la creación de una mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán, la cual puede volver a reunirse si la negociación presupuestaria con los independentistas resulta satisfactoria. La modificación del Código Penal para modificar el delito de sedición, por el que fueron condenados la mayoría de los dirigentes independentistas en el Tribunal Supremo hace un año, puede ser una contrapartida que saque a los presos políticos de las cárceles de una vez y desinflame, algo, el conflicto catalán. El Gobierno, además, puede plantear indultos, algo que también podría afectar favorablemente a los presos catalanes.

Los apoyos de la izquierda abertzale pueden tener que ver con que el Gobierno facilite el acercamiento, conforme a la ley, de los presos vascos que siguen sometidos a la política de dispersión, que se puso en marcha cuando la banda terrorista ETA existía, para distanciarlos entre sí en cárceles de todo el Estado. Ahora estos presos vascos cumplen sus condenas en cárceles alejadas



Concentración por el acercamiento de los presos de ETA en 2018
(Foto: EFE)

de sus familiares, lo que supone una vulneración de derechos para sus familias. Hoy por hoy, y en las próximas semanas, veremos un toma y daca entre el sector socialista del Gobierno y el de Unidas Podemos haciendo gestos y carantoñas a Ciudadanos, por un lado, y a independentistas, por otro, para lograr sus apoyos. Podría ser que, incluso, el Gobierno consiguiera una sólida base para aprobar los presupuestos, sumando desde el independentismo y las distintas izquierdas hasta la derecha de Ciudadanos, que quiere fortalecer su talante europeo tras su aventura nacionalista. Veremos.

Elecciones catalanas: un nuevo paso en el conflicto territorial

Como decimos, salvo que la pandemia lo evite, están programadas elecciones catalanas para el próximo 14 de febrero. La última vez que se celebraron estos comicios, que volvieron a dar mayoría absoluta del independentismo en el Parlament, sumando a los diputados nacionalistas de derechas de JxCat, a los izquierdistas de ERC y los anticapitalistas de la CUP, fue en diciembre de 2017. En aquel momento, el Gobierno de Rajoy había aplicado sobre Catalunya el artículo 155 de la Constitución, tras la declaración de independencia, por el cual suprimía algunas funciones de la autonomía catalana, disolvía el Parlament y el gobierno. De esta manera, convocó estos comicios que volvieron a demostrar una mayoría parlamentaria independentista en Catalunya.

En esta ocasión, la relevancia de las elecciones está en que el conflicto se encuentra en clave de desescalada. Tras la inflamación del anterior ciclo, el independentismo ha hecho autocrítica y, sobre todo ERC, ha hecho la lectura de que para poder seguir batallando por la independencia de Catalunya necesitan sumar más apoyos, cuentan desde hace años con un inamovible 50% que oscila a veces algún punto hacia arriba o abajo. Ahora mismo, según encuestas, la suma del independentismo volvería a ganar las elecciones y conseguiría mayoría absoluta en el Parlamento, y se fijan como objetivo ganar por más del 50% de los votos.

Siempre según sondeos, ERC sería la primera fuerza. Por otro lado, el nacionalismo de derechas catalán se ha dividido en distintas fuerzas. Por un lado, JxCat sigue teniendo el tirón de Carles Puigdemont. El ex-president de la Generalitat es ahora eurodiputado y la Justicia española no ha

conseguido que la belga reconozca ninguna orden de extradición para juzgarle en Madrid, un claro fracaso del judicial español. Por otro lado, otras opciones más posibilistas y no tan rupturistas con el Estado se han ido disgregando de JxCat, como el Partit Nacionalista Català o PDeCat.

En el sector españolista, el PSC (partido hermano del PSOE en Catalunya) sube en intención de votos robándole apoyo a Ciudadanos, que era el partido líder de la oposición durante la actual legislatura y que podría perder mucho tirón electoral en febrero. Por otro lado, el PP se mantendría en su escasa presencia en el Parlament de Catalunya y entraría, por primera vez, la ultraderecha de Vox.

Desde PSOE y Unidas Podemos se vería con buenos ojos una victoria de ERC que le lleve a la Presidència de la Generalitat. Si es así, podría establecerse un proceso de diálogo que, poco a poco, vaya buscando una solución al conflicto territorial, otro de los espejos que traen al presente los problemas del pasado. Los cauces de entendimiento en el Congreso entre PSOE, Unidas Podemos y ERC han mejorado en los últimos meses, pero siempre son susceptibles de romperse si la tensión política aumentara en Catalunya por algún motivo, como una nueva decisión judicial. Sin



Pere Aragonès, coordinador nacional de ERC y vicepresidente del Govern, en el 28º Congreso Nacional del partido el 21.12.19 (Foto: ACN)

embargo, tal y como decíamos, el Estado español debe hacer unos movimientos previos al debate político sobre este conflicto: que los presos políticos salgan de las cárceles, para lo que la reforma en el Código Penal del delito de sedición puede ser clave. Al mismo tiempo, el Gobierno puede proponer indultos a presos, otra carta que tienen sobre la mesa.

La moción de censura de Vox: trumpismo en vena

Los pasados 21 y 22 de octubre se celebraba en el Congreso de los Diputados una moción de censura a Sánchez presentada por el partido ultraderechista Vox. La moción significó una estrepitosa derrota de los ultras, que tan solo consiguieron los votos de sus 52 diputados y el resto, 298, en contra. Sin embargo, desde el principio se evidenció que la moción no la usaba Vox para intentar derrocar al actual Gobierno de coalición, sino como un episodio más de la batalla que se libra en el espectro de las derechas.

La duda se posó, esos días, sobre el PP y su líder, Pablo Casado. El debate en las filas conservadoras estaba servido: votar en contra, como terminó ocurriendo, o abstenerse a la moción de censura de Vox. Casado utilizó su turno de intervención para mostrarse duro con Santiago Abascal, el líder de Vox que proviene de las filas del PP. Muchos periodistas analizaban esta disputa como la ruptura definitiva del PP con Vox, pero nada más lejos: el PP sigue gobernando hasta en cuatro comunidades autónomas gracias a los pactos y apoyos con la ultraderecha. Otros medios titularon por la estrepitosa derrota de Vox. Efectivamente, así fue a nivel parlamentario, pero, ¿realmente Vox salió escaldado de su propia moción de censura?

El lenguaje ultraderechista de Vox ha sido reproducido con más frecuencias en medios de comunicación y redes tras la moción de censura. En un momento de descontento social e incertidumbre, la ultraderecha quiere sacar rédito.



Santiago Abascal y Pedro Sánchez durante el debate de moción de censura (Foto: REUTERS)

Si atendemos al barómetro del CIS publicado el 18 de noviembre, -cuya encuesta se realizó en los primeros días de noviembre, pocos días después del debate parlamentario-, no es así. En la disputa entre PP y Vox, en el último barómetro, el PP ha bajado una décima con respecto al mes pasado. Vox, por el contrario, ha aumentado siete décimas. Más allá del comportamiento demoscópico, la principal victoria de Vox estuvo en que consiguió copar la actualidad y colar su relato durante varios días. Trumpismo en vena: apelaciones a la conspiración de que China fue la creadora del coronavirus, definición del Gobierno como una dictadura comunista, referencias a la “iberoesfera”, una idea por la cual el Estado español estaría llamado a liderar una comunidad conjunta con América Latina, para lo que Vox ha puesto en marcha el establecimiento de relaciones con las oligarquías económicas de estos países... El lenguaje ultraderechista de Vox ha sido reproducido con más frecuencias en medios de comunicación y redes tras la moción de censura. En un momento de descontento social e incertidumbre, la ultraderecha quiere sacar rédito.

El ring de la izquierda: nuevo ciclo tras la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno

La entrada de Unidas Podemos en el Gobierno no ha venido acompañada de un aumento en la intención de votos a esta fuerza política y, sin embargo, conllevó una estrepitosa derrota en el mes de julio en los comicios gallegos y vascos. En los primeros, pasó de ser segunda fuerza en el Parlamento a fuerza extraparlamentaria, sus votos se fueron a los independentistas de izquierdas del BNG. En los segundos, perdieron la mitad de los votantes y pasaron de tener 11 escaños a seis.

Además, las facciones críticas con Iglesias en Podemos, quien ha fortalecido su alianza con IU, en especial con el Partido Comunista (PCE) y su secretario general, Enrique Santiago, se han ido desvinculando del proyecto inicial. Así, hace casi dos años, Errejón iniciaba su proyecto personal en Más Madrid, que en las elecciones de noviembre del 2019 se presentó como Más País obteniendo dos escaños en el Congreso. Más Madrid es la primera fuerza en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid y tiene notable presencia en la Asamblea de Madrid, el parlamento regional. Errejón optó por inspirarse en los partidos verdes europeos, aunque con una sensibilidad más izquierdista, en su nueva aventura fuera de Podemos.



Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias en una imagen de archivo
(Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Por su parte, estos días se ha materializado la ruptura definitiva en Andalucía. En la región más poblada del Estado, Teresa Rodríguez, quien hasta hace unos meses fue la líder de Podemos Andalucía, ha sido expulsada del grupo parlamentario Adelante Andalucía, que solo se queda con los diputados de IU y el apoyo de Podemos. Rodríguez forma parte del partido Anticapitalistas, el cual decidía el invierno pasado romper con Podemos una vez este materializaba su entrada en el Gobierno. Este partido siempre ha sido crítico con compartir gobiernos con el PSOE, partido al que considera parte del “Régimen del 78”.

Estratégicamente, la supervivencia de Unidas Podemos queda muy ligada a la permanencia en el Gobierno de coalición del Estado, es por ello que estos presupuestos son de vital importancia también en clave interna. Unidas Podemos no está fuerte en los territorios: en las nacionalidades históricas (Catalunya, Euskadi y Galicia) los votos de izquierdas se los llevan mayoritariamente las fuerzas independentistas. En dos territorios claves, en los cuales siempre han tenido sus espaldas primero el PCE, luego IU y ahora Unidas Podemos, Madrid y Andalucía, existen fuerzas políticas de izquierdas que pueden darles batalla en su terreno de juego. Además, ambas surgen de las entrañas de Podemos: la alternativa de Errejón en Madrid y la de Rodríguez en Andalucía.

... la supervivencia de Unidas Podemos queda muy ligada a la permanencia en el Gobierno de coalición del Estado, es por ello que estos presupuestos son de vital importancia también en clave interna. Unidas Podemos no está fuerte en los territorios: en las nacionalidades históricas (Catalunya, Euskadi y Galicia) los votos de izquierdas se los llevan mayoritariamente las fuerzas independentistas.

Por otro lado, IU se encuentra en pleno debate asambleario. Una Asamblea Federal que se ha demorado en dos ocasiones por culpa de la pandemia. Se iba a celebrar en verano, después, el próximo mes de enero. Finalmente, se ha vuelto a desplazar a la primavera. El debate político y organizativo es de vital importancia para IU, pues versa sobre su propia utilidad en el actual contexto político. IU, que nació en 1986 como una plataforma que aglutinaba entorno al PCE a otros partidos y sensibilidades de izquierdas como contraposición al PSOE que en aquel momento apostaba por la entrada española en la OTAN, se enfrenta a la disyuntiva de cuál es su papel en el momento en el que ya existe Unidas Podemos.

El sector más afín al actual coordinador federal y ministro de Consumo, Alberto Garzón, apuesta por mantener y fortalecer la identidad de IU dentro de Unidas Podemos. El más próximo a Santiago, líder del PCE, partido que este año cumplirá un siglo de existencia, a fortalecer Unidas Podemos y las relaciones directas de Podemos con el PCE. La sangre no llegará al río, parece ser, y ambas posturas compartirán una misma candidatura en el congreso interno del 2021. Existe una candidatura crítica que aboga, sin embargo, por la ruptura de IU con Podemos y la confluencia que mantienen: Unidas Podemos. En principio, tiene pocas opciones de hacerse con la formación izquierdista.

Sáhara Occidental: el conflicto que siempre vuelve

Como decíamos, uno de esos espejos que hacen que el pasado irresuelto vuelva a la política española es el Sáhara Occidental. Esta colonia española hasta 1975 no llegó a cerrar su proceso de descolonización, pues mediante los Acuerdos de Madrid de aquel año, el Estado español pretendió entregar el territorio a Marruecos y Mauritania. Estos acuerdos no son válidos, según la legalidad internacional, y el Sáhara Occidental sigue, por tanto, vinculado al Estado español que sigue siendo la potencia administradora responsable de este proceso de descolonización.

En 1975, comenzó una guerra por el territorio entre Marruecos y el Frente Polisario. Auspiciado por la ONU, en 1991, se acordó un alto el fuego con el compromiso de que se celebraría un referéndum de autodeterminación para que la población saharauí decidiera sobre su independencia o integración en Marruecos. Esta consulta nunca se celebró, la ONU estableció en la zona a la MINURSO (Misión Internacional para el Referéndum en el Sáhara Occidental) -un fracaso absoluto- pues ni ha conseguido el referéndum ni siquiera ha velado por el respeto de los derechos humanos de la población saharauí.

Esta población vive separada por un muro de más de 2.700 kilómetros, que divide el Sáhara Occidental en dos partes. En un lado, se encuentran los territorios liberados y los campamentos de población refugiada, en la región argelina de Tinduf, donde viven decenas de miles de saharauís en unas condiciones materiales paupérrimas. Al otro lado del muro, se encuentran los territorios ocupados por las fuerzas militares marroquíes, en cuyas ciudades las desapariciones de saharauís y encarcelamientos arbitrarios han sido una constante. En la zona ocupada, se encuentran los fosfatos y uno de los principales bancos pesqueros del mundo. Los tribunales europeos han condenado en más de una ocasión que la Unión Europea negocie acuerdos de pesca con Marruecos que incluyan las aguas del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo.

En el sur del Sáhara se encuentra la región de Guerguerat en la cual Marruecos ha intentado construir en varias ocasiones una carretera para sacar a través de ella los recursos naturales del Sáhara ilegalmente. El Derecho Internacional condena estos expolios si no repercuten en el beneficio de la población local, y no es el caso. La construcción de la carretera fue paralizada por la ONU en el pasado al considerarse esta zona como neutral. Sin embargo, hace tres años, vulnerando Marruecos otra vez los acuerdos internacionales, la construyó y se agilizó el tráfico de mercancías hacia Mauritania.

Hace unos días, un grupo de civiles saharauís comenzaron a protestar pacíficamente cortando la carretera y evitando que los camiones transcurrieran por ella. El ejército marroquí intervino para abrir paso a los camiones, entrando en zona



Manifestantes saharauís en Guerguerat (Foto: EFE)

neutral para reducir a los manifestantes, saltándose el alto el fuego. El ejército saharauí, dirigido por el Frente Polisario, movimiento de liberación que también gobierna la RASD (República Árabe Saharaui Democrática) declaró el estado de guerra y los combates han comenzado.

Como decíamos al principio este conflicto apela directamente al Estado español como potencia administradora responsable del proceso de descolonización del mismo. Es otro de esos espejos que relacionan el pasado con el presente. El Gobierno de coalición tiene la oportunidad de liderar un proceso hacia la paz que reconozca lo que el Derecho Internacional reconoce al pueblo saharaui, el derecho a la autodeterminación de un territorio que no ha clausurado su proceso de descolonización. Hasta el momento los distintos gobiernos españoles de las últimas décadas siempre se han situado al lado de Marruecos, no asumiendo sus responsabilidades. Marruecos chantajea a España y Europa, mostrándose como garantía de control de los flujos migratorios y del terrorismo islamista. Sin embargo, Marruecos está reinado por un monarca con tintes feudales bajo un régimen sin ninguna garantía democrática.

A pesar de la posición pro-marroquí de los sucesivos gobiernos, del PP o del PSOE, la sociedad española está altamente movilizada en favor del pueblo saharaui. Decenas de asociaciones en todas las provincias llevan a cabo labores de incidencia política y humanitarias. Uno de los principales programas es el de Vacaciones en Paz. Miles de niños saharauis visitan a familias de acogida española todos los veranos, así se alejan de las duras condiciones estivales de los campamentos de población refugiada en el desierto, pasan revisiones médicas y, sobre todo, generan unos lazos solidarios entre miles de familias españolas con familias saharauis. Este programa lo comenzó el PCE en el año 1979.



Concentración de la Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui
Valencia, 15 de noviembre de 2020 (Foto: ONG CERAI)

Los vínculos de las izquierdas españolas al PSOE con el pueblo saharaui son, por lo tanto, enormes, políticos y sentimentales. Siempre han defendido su derecho a la autodeterminación. Ahora, por primera vez, estas izquierdas han llegado al Gobierno y tienen la opción de incidir en la postura española ante este conflicto. Si no es así, la brecha entre dirigentes y cargos públicos de Unidas Podemos y buena parte de su militancia y electorado puede crecer. De momento, las concentraciones en solidaridad con saharauis se multiplican en distintas ciudades españolas. El pasado, que vuelve.